

Democracia, derechos y dinero

Alejo José G. Sison

Como la coartada de las armas de destrucción masiva que supuestamente poseía Sadam Husein ya ha perdido todo viso de credibilidad, el presidente estadounidense Bush esgrime ahora la implantación de la democracia como motivo de la invasión y ocupación de Iraq. Da igual que esa excusa también pudiera servir para derrocar los gobiernos de todos y cada uno de los países del golfo, empezando por el de Arabia Saudí (patria de Bin Laden y de los terroristas suicidas de las Torres Gemelas), o el de cualquier otro estado de mayoría musulmana, con las excepciones muy matizadas de Indonesia, Malasia y Turquía. Tampoco importa mucho que el pueblo iraquí, una vez liberado de las garras del tirano y dictador, no esté exactamente saltando de alegría bajo el gobierno provisional impuesto por la coalición extranjera. Bush sigue insistiendo en que sólo con la extensión de la democracia a otros países podrá conseguirse un mundo más seguro, sobre todo para los ciudadanos norteamericanos, y quizás lograr a partir de ahí un mundo más próspero y mejor en todos los sentidos. Esta es la misión al mismo tiempo histórica y trascendental de los EE.UU. de América, y del gobierno del presidente Bush en particular. Pero ¿sabe bien Bush lo que dice?

A juzgar por los criterios que expone Fareed Zakaria en su reciente libro, *The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and Abroad* (New York/London: W.W. Norton & Co., 2003), parece que no. En 1992, a sus 28 años, Zakaria se convirtió en el director más joven de *Foreign Affairs*, probablemente la revista más influyente de política internacional y economía en el mundo. Después, en el 2000, pasó a ocupar la dirección de *Newsweek Internacional*, un semanario que cuenta con unos tres millones y medio de lectores. En contra de lo que opina Bush, Zakaria, sostiene la tesis de que nunca en la historia hemos vivido en un mundo tan democrático como el de ahora. De hecho, en más del 60% de los 119 estados que hoy se reconocen rigen gobiernos elegidos por sus propios ciudadanos. El contraste con la situación en el año 1900, cuando no había ningún gobierno elegido en unos comicios en los que pudieran participar todos los ciudadanos con mayoría de edad, es verdaderamente llamativo.

Pero no es sólo la extensión de la democracia entre los países lo que es aquí digno de reseñar, sino también —y sobre todo— su penetración imparable en los distintos ámbitos de la vida, además del propiamente político. Nos encontramos con que nuestro modo de vida se ha democratizado por completo. La economía se ha democratizado porque el consumo, el ahorro y la inversión se han convertido en auténticos “fenómenos de masas” en los que participan activamente cientos de millones de personas. Esto describe la situación actual en los países industrializados y una clara tendencia creciente en los países en vías de desarrollo. Los pequeños grupos de capitalistas que tradicionalmente ostentaban el poder en las grandes empresas lo han perdido en favor de los grandes colectivos de trabajadores-accionistas, que están suscritos a mutualidades y fondos de pensiones. Ya todos somos capitalistas. También la cultura se ha democratizado. Ha adoptado la forma de “cultura popular”, donde la clave del éxito en sus diversas manifestaciones ya no es tanto a quiénes gustan como a cuántos: la cantidad ha sustituido a la calidad. La “alta cultura” apenas sobrevive en un nicho marginal para entendidos de edad avanzada y ha dejado de ocupar el lugar central, el punto de referencia de los artistas y del público en general. Hasta la religión se ha democratizado porque, salvo contadísimas excepciones, las iglesias han agudado su acervo doctrinal y sus requerimientos morales, intentando ponerse al día y acomodarse a las creencias y los deseos de sus feligreses. En este sentido podría interpretarse lo ocurrido con la iglesia anglicana respecto de asuntos como el sacerdocio femenino y la homosexualidad. Parece que en muchas iglesias ya no se trata tanto de dar culto a Dios como de tener contentos a los fieles, ofreciéndoles alguna especie de terapia espiritual.

Así, la democracia ha quedado como el único modo, aceptado y reconocido por las clases rectoras y por la sociedad en su conjunto, de legitimar el poder. En consecuencia, se ha forzado la apertura de sistemas y estructuras cerrados, se han tambaleado las antiguas jerarquías y el poder de decidir acerca de multitud de cuestiones sociales ha venido a descansar sobre las autodenominadas bases.

Sin embargo, lo sorprendente —observa atinadamente Zakaria— es que la democracia no siempre ha traído consigo los beneficios que se esperaban de ella. En principio, y según la experiencia de los países de Norteamérica y de Europa occidental, junto con la democracia vendrían los beneficios prometidos por el liberalismo constitucional, como la celebración regular de elecciones libres, el estado de derecho, la separación de poderes y la garantía o protección de libertades básicas como las de expresión, de asamblea, de religión o de propiedad privada para todos los ciudadanos. Pero esto no ha ocurrido así: más bien ha sido una rarísima excepción en el resto del mundo, fuera de las regiones ya mencionadas. No hay más que fijarse en los regímenes democráticos de Zimbabue, Azerbaiyán y

Camboya. Ya desde la época de Hitler como canciller en Alemania, muchas personas y grupos que defendían valores de lo más antidemocráticos, como el racismo, el fascismo o el fundamentalismo religioso han alcanzado el poder sirviéndose de medios democráticos. La democracia, por tanto, ha preparado el camino a dictaduras y tiranías. Con excesiva frecuencia, gobiernos elegidos democráticamente desde el punto de vista del procedimiento conculcan con impunidad los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y religiosos de sus ciudadanos. Se da la circunstancia curiosa de que en algunos países, como por ejemplo, en la antigua Yugoslavia y en Indonesia, había mayor armonía étnica y tolerancia religiosa cuando estaban gobernados por dictadores que en la actualidad, cuando son nominalmente democracias. Desafortunadamente, en demasiados casos el florecimiento de la democracia no sólo no ha ido a la par, sino que incluso ha causado el retroceso de las libertades individuales.

Desde los tiempos de Herodoto, la democracia se ha referido, ante todo, al procedimiento por el que el mismo pueblo elige a sus gobernantes. Un gobierno así constituido podría ser perfectamente ineficaz, corrupto, preso de intereses particulares e insensible al bien común; sería desde luego un gobierno indeseable, pero no por ello anti-democrático. Otra cosa es el liberalismo constitucional, que apunta más bien a las metas o fines de un gobierno que a su proceso de selección. Su objetivo es proteger la dignidad y la autonomía individual de cualquier género de coacción, originada en el estado o en los otros miembros de la sociedad. Se llama liberalismo porque defiende las libertades individuales, y es constitucional por cuanto consagra esas libertades en su derecho fundamental de estado. Así entendemos cómo los países occidentales disfrutaron de elementos importantes del liberalismo constitucional, como el estado de derecho y las garantías de la propiedad privada, mucho antes de que consiguiesen el sufragio universal que los convertía en democracias de pleno derecho, un evento que ocurrió, para la mayoría de ellos, sólo a finales de la década de 1940. En ese mismo sentido, el territorio de Hong Kong, que nunca fue una democracia, también disfrutaba de un alto nivel de libertades y derechos, al menos antes de que fuera anexionado por China en los años 90. Por contraste, a la Autoridad Palestina de Yasir Arafat — probablemente el único régimen mínimamente democrático entre los países árabes en Oriente Medio— siempre se le han achacado grandes carencias en materia de libertades individuales.

¿Por qué la democracia no siempre ha conducido a un régimen liberal constitucional? Una explicación que puede parecer simplista pero que nunca ha perdido su fuerza es la que se basa en el dinero. Como ya afirmó en 1959 Seymour Martin Lipset (“Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy”, *American Political Science Review*, n. 53), cuanto más rica es una nación, más posibilidades tiene de sostener un gobierno democrático liberal; por el contrario, aunque puede que un país pobre alguna vez logre una apariencia de democracia, su régimen siempre acabará debilitándose hasta que por fin desaparezca. Un estudio empírico de Adam Przeworski y Fernando Limongi (“Modernization: Theories and Facts”, *World Politics*, 49, n.2, January 1997), basado en el seguimiento de la evolución política de distintos países entre 1950 y 1990, corrobora esta observación. Según Przeworski y Limongi, en un país con una renta per cápita inferior a los \$1.500, un régimen democrático tiene una esperanza de vida de tan sólo ocho años, con una renta de entre \$1.500 y \$3.000, unos dieciocho años, y a partir de una renta de \$6.000 el gobierno democrático en principio ya se consolida hasta tal punto de que puede seguir indefinidamente. Sólo a partir de un determinado nivel de desarrollo económico puede funcionar el gobierno democrático en un país, de modo que garantice las libertades individuales básicas de sus ciudadanos.

Sin embargo, el dinero de por sí no produce la democracia ni tiene capacidad para comprar las libertades políticas y civiles. El dinero relevante para los propósitos de la democracia y de las libertades es aquél por el que han trabajado los ciudadanos de un país; no sirve el dinero que procede exclusivamente de la explotación de ingentes y valiosos recursos naturales. De hecho, según una investigación llevada a cabo por Jeffrey D. Sachs y Andrew D. Warner (“Natural Resource Abundance and Economic Growth”, Working Paper n° W5398, National Bureau of Economic Research) a partir de los datos macroeconómicos de 98 países en vías de desarrollo a lo largo de dos décadas, la riqueza de recursos naturales supone más una maldición que una bendición para los países, desde el punto de vista de la modernización política y el progreso económico. La desafortunada experiencia de los países exportadores de petróleo, como Arabia Saudí, Nigeria y Venezuela es paradigmática. Volviendo al caso de Arabia Saudí, país con una alta renta per cápita pero carente de democracia y de libertad, su triste situación se debe primordialmente a que la mayor parte de su población ha permanecido en la ignorancia, y sin formación laboral o profesional: el país funciona gracias a legiones de trabajadores extranjeros que dirigen las instituciones de enseñanza, los hospitales, los bancos, los medios de comunicación, etc.

Un estado necesita dinero para que florezcan las instituciones democráticas y los valores liberales en la sociedad, pero no el dinero fácil o regalado; tiene que ser dinero procedente del trabajo de sus ciudadanos, es decir, de los impuestos que el gobierno recauda a partir de sus ingresos y sueldos. Sólo entonces, cuando el estado se financia con los impuestos de sus ciudadanos, tendrán éstos el poder de exigir responsabilidades al gobierno en la administración de ese dinero, y más importante todavía, podrán demandar representación en las deliberaciones y decisiones políticas que afectan a su seguridad y bienestar. Las imposiciones fiscales sólo se justifican a cambio de la participación política de los ciudadanos. De otra forma, cuando el estado cuenta con fuentes de financiación al margen de los impuestos de los ciudadanos, no tendrá incentivos para responsabilizarse de sus actuaciones ante ellos, ni ellos tendrán tampoco el poder de exigirselo. Este es precisamente el caso de los ciudadanos saudíes en relación con su gobierno, que se rige por una especie de acuerdo tácito según el cual los ciudadanos no exigen nada en términos políticos a su gobierno, ya que tampoco contribuyen nada al estado en términos económicos. Es el reverso del eslogan de la revolución norteamericana, “No hay impuestos sin representación”: ahora sabemos que tampoco habrá representación si antes no se pagan impuestos.

Si el dinero es tan importante para la supervivencia de la democracia y la implantación de los valores liberales y constitucionales, parece que habría que acometer antes las reformas económicas que las políticas. Este es justamente el camino que había emprendido Lee Kwan Yew en Singapur desde mediados de los años cincuenta. Este pequeño estado nación figura entre los países con mayor libertad económica y cuenta con una administración pública de lo más eficaz, según los estudios del *World Economic Forum*, pero tiene una libertad de expresión y de prensa muy limitada, una oposición política prácticamente nula y sólo una simulación de elecciones libres. En este punto se encuentra también la principal diferencia estratégica de desarrollo entre China y Rusia. Mientras que China reformó primero su economía, abriendo sus mercados gradual y controladamente, Rusia optó por una apertura (*glasnost*) y una reestructuración (*perestroika*) políticas antes de llevar a cabo cambios económicos. Desde el punto de vista de las libertades políticas y civiles, Rusia aventaja actualmente a China, pero esas libertades se encuentran en mayor peligro, por falta de un desarrollo económico paralelo. Por otra parte, puede que China tenga mayores tasas de desarrollo económico que Rusia, pero también ha sido el país donde se han producido los mayores crímenes de un gobierno contra su propio pueblo, como la masacre de Tienanmen o la persecución del grupo Falungong.

La democracia versa sobre el acceso al poder; el liberalismo constitucional, sobre cómo se autolimita ese poder. Sin el liberalismo constitucional, la democracia puede llegar a ser indiferenciable en sus efectos de una dictadura, en la medida en que un régimen se sirva de su legitimación inicial para usurpar el poder, tanto lateralmente, de las otras ramas del gobierno, como verticalmente, de las distintas instituciones sociales. En esto se resume la tragedia venezolana de estos últimos años bajo el mandato del presidente Chávez.

¿Cómo salvar a la democracia de sí misma? Zakaria propone ante todo la restauración de la autoridad en aquellas instituciones en las que se había perdido debido a la infiltración democrática: en las familias, en los sistemas educativos, en las organizaciones culturales, en las empresas, en las jerarquías religiosas y en los partidos políticos. En todos los ámbitos hace falta revitalizar nuevas elites que guíen y orienten a la sociedad. Paradójicamente, la democracia depende para su buen funcionamiento del estado de salud de un conjunto de instituciones cuyos regímenes no son democráticos. La raíz del mal está justamente en haber absolutizado el gobierno democrático, que en realidad no es nada más que un sistema o instrumento de organización política. La restauración de la autoridad en los diversos ámbitos por la que aboga Zakaria podría ser el primer paso hacia una regeneración moral más amplia que la sociedad —y no sólo la democracia— exige. La advertencia aristotélica de que el mejor régimen político es aquél que goza de los mejores ciudadanos —también en sentido ético— no ha perdido vigencia. Ahora bien, ¿cómo identificar a estas elites?